

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio.

Santiago de Cali, catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

<b>Radicación No.</b>	: 76001-33-33-017-2018-00263-02
<b>Medio de Control</b>	: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
<b>Demandante</b>	: BRENDA CELINA ARGOTY CUARAN <a href="mailto:bcac@hotmail.com">bcac@hotmail.com</a> <a href="mailto:juridico@lexius.com.co">juridico@lexius.com.co</a>
<b>Demandado</b>	: NACION-RAMA JUDICIAL <a href="mailto:dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co">dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co</a>
<b>Tema</b>	: ACEPTA IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR LOS MAGISTRADOS

**Mag. Ponente** : FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ

Procede la Sala Jurisdiccional de Decisión, a resolver el impedimento manifestado por los Magistrados Patricia Feuillet Palomares, Jhon Erick Chaves Bravo, Eduardo Antonio Lubo Barros, Oscar Silvio Narváez Daza, Omar Edgar Borja Soto, Ronald Otto Cedeño Blume, Ana Margoth Chamorro Benavidez, Víctor Adolfo Hernández Díaz y Guillermo Poveda Perdomo; para conocer de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, por la señora Brenda Celina Argoty Cuarán contra la Nación - Rama Judicial.

ANTECEDENTES

La demanda persigue concretamente que se declare la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales le fue denegado a la demandante el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales. A título de restablecimiento del derecho pide que se le reliquiden y paguen las prestaciones sociales causadas y las que se causaran con inclusión en la base de liquidación de la bonificación judicial.

TRÁMITE.

El conocimiento del libelo correspondió en segunda instancia al Despacho del Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume, quien resolvió declararse impedido<sup>1</sup>, por considerar que tiene interés directo en las resultas del proceso ya que las pretensiones de la demanda se encuentran dirigidas a obtener la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales

<sup>1</sup> Oficio cargado en la plataforma SAMAI.

se negó a la parte demandante el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales.

Añade que, dicha prestación también fue percibida por él cuando fungió como Juez de la Republica y que en idéntica situación también se hallan los Magistrados Patricia Feuillet Palomares, Eduardo Antonio Lubo Barros, Oscar Silvio Narváez Daza, Omar Edgar Borja Soto, Ronald Otto Cedeño Blume, Ana Margoth Chamorro Benavidez, Víctor Adolfo Hernández Díaz y Guillermo Poveda Perdomo.

Por lo que, al tener expectativas en el desenlace de esta controversia, estiman que están impedidos para conocer de la demanda, al socaire del numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso.

Remitieron entonces el impedimento al Despacho del Suscrito, en consideración a que no me he desempeñado en el cargo de Juez Administrativo ni he devengado la bonificación judicial.

## **CONSIDERACIONES.**

### **1. Competencia.**

Esta Corporación es competente para conocer del impedimento manifestado por los mencionados Magistrados del Tribunal Administrativo del Valle, según lo preceptuado en el artículo 131 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

### **2. Problema jurídico.**

Se plantea así:

¿Los Magistrados Patricia Feuillet Palomares, Jhon Erick Chaves Bravo, Eduardo Antonio Lubo Barros, Oscar Silvio Narváez Daza, Omar Edgar Borja Soto, Ronald Otto Cedeño Blume, Ana Margoth Chamorro Benavidez, Víctor Adolfo Hernández Díaz y Guillermo Poveda Perdomo; están impedidos para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, formulada por la señora Brenda Celina Argoty Cuarán, a través de la cual solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad oficial demandada negó la reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial?

### **3. Marco normativo.**

Las causales de impedimento buscan que el proceso no se vea empañado por circunstancias que desdigan de la imparcialidad e independencia que deben acompañar al juez que de él conoce; por eso se constituyen en una herramienta propicia para que el funcionario pueda separarse de su conocimiento cuando se configure una de las causales expresas que la ley señala, pues impera la taxatividad.

Ahora, la causal aducida en este caso es la prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP que establece como tal “Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuatro grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso”.

Sobre esta causal, el Consejo de Estado se ha pronunciado y ha señalado:

(...) la Sala, de manera reiterada, ha adoptado el criterio expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

‘Si bien esta causal subjetiva es bastante amplia, en cuanto subsume cualquier tipo de interés, ya sea directo o indirecto, lo cierto es que dicho interés además de ser real y serio, debe tener relación inmediata con el objeto mismo de la litis o cuestión a decidir; debe ser de tal trascendencia que, teniendo en cuenta el caso concreto, implique un verdadero trastorno en la imparcialidad del fallador y pueda afectar su capacidad de juzgamiento y el desempeño eficaz y ajustado a derecho respecto de la labor que desempeña.

‘Es por esta razón que cualquier tipo de manifestación que no esté sustentada o en la que no se evidencie de manera clara y precisa la posibilidad de que el juzgador pueda verse perturbado al momento de pronunciarse en determinado asunto, comprometiendo por ello su imparcialidad, no será suficiente para declarar fundado el impedimento que pudiese ser manifestado en determinado asunto’<sup>2</sup>.

Al respecto, se advierte que esta causal es la más amplia de las consagradas por el ordenamiento jurídico y, como lo enseña la doctrina, el interés al que se refiere “puede ser directo e indirecto y de cualquier índole, es decir, material, intelectual, o inclusive puramente moral. (...) No sólo el interés económico, el más común, sino cualquier otro motivo que lleve al funcionario a querer determinada decisión, acorde con el interés (de cualquier índole) que abrigue frente al proceso”<sup>3</sup>.

Así, para que el citado impedimento se configure y, se concluya que está comprometida la rectitud del juez es necesario que el funcionario tenga interés directo o indirecto en la actuación, “porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a sus parientes, o a sus socios y así lo observe y advierta, motivo por el cual debe declarar su impedimento.

---

<sup>2</sup> Consejo de Estado, providencia de 28 de julio de 2010, Exp: 2009-00016, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

<sup>3</sup> López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 1. Dupré Editores. Décima Edición 2009. Página 239 y siguientes.

Este último, como de manera reiterada lo ha dicho la Corporación, consiste en el provecho, conveniencia, utilidad o menoscabo que, atendidas las circunstancias derivarían el funcionario, su cónyuge o los suyos, de la actuación o decisión que pudiera tomarse del asunto”<sup>4</sup>.

#### **4. Caso concreto.**

Como se anotó en párrafos que preceden, la parte demandante pretende la nulidad de los actos administrativos por los cuales le fue denegado el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales. Y a título de restablecimiento del derecho pide que se le reliquiden y paguen las prestaciones sociales causadas y las que se causaran con inclusión en la base de liquidación de la bonificación judicial.

El impedimento de los Magistrados Patricia Feuillet Palomares, Jhon Erick Chaves Bravo, Eduardo Antonio Lubo Barros, Oscar Silvio Narváez Daza, Omar Edgar Borja Soto, Ronald Otto Cedeño Blume, Ana Margoth Chamorro Benavidez, Víctor Adolfo Hernández Díaz y Guillermo Poveda Perdomo; consiste en haberse desempeñado como Jueces de la República, tiempo durante el cual percibieron la bonificación judicial, y que a través de la presente demanda se persigue el reconocimiento de ese emolumento como factor salarial para liquidar prestaciones sociales en favor de un servidor público de la Rama Judicial, configurándose la causal de impedimento contemplada en numeral 1 del artículo 141 del CGP.

Para la Sala es evidente que tienen interés directo en las resultas del proceso, pues la decisión que aquí se tome, compromete su imparcialidad, toda vez que el objeto de discusión es el carácter salarial del porcentaje devengado por concepto de bonificación judicial que no ha sido reconocido a los servidores públicos tanto de la Rama Judicial como de la fiscalía general de la Nación, a título de factor salarial para liquidar sus prestaciones sociales.

De acuerdo con lo expuesto, es claro que se configura la causal aducida, dado que ante dicho panorama, se encuentra afectada la autonomía e imparcialidad de los Magistrados que decidieron separarse del conocimiento del asunto porque en efecto les asiste un interés directo.

Por todo lo anterior, se declarará fundado el impedimento formulado por los Magistrados Patricia Feuillet Palomares, Jhon Erick Chaves Bravo, Eduardo Antonio Lubo Barros, Oscar Silvio Narváez Daza, Omar Edgar Borja Soto, Ronald Otto Cedeño Blume, Ana Margoth Chamorro Benavidez, Víctor Adolfo Hernández Díaz y Guillermo Poveda Perdomo.

---

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia. Expediente No. 110010230000201000151-00. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. Auto de 16 de septiembre de 2010.

Por ende, serán separados del conocimiento del presente medio de control y, por consiguiente, será el suscrito quien aprehenderá el conocimiento del asunto para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

De conformidad con el numeral 3º del artículo 131 del CPACA, se integrará la nueva Sala con quienes no estén impedidos para decidir del asunto, esto es, con los Doctores Oscar Valero Nisimblat y Luz Elena Sierra Valencia y; así se dejará consignado en la parte resolutive de este auto.

En virtud de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

### **R E S U E L V E:**

**1. DECLARASE FUNDADO** el impedimento planteado por los Magistrados Patricia Feuillet Palomares, Jhon Erick Chaves Bravo, Eduardo Antonio Lubo Barros, Oscar Silvio Narváez Daza, Omar Edgar Borja Soto, Ronald Otto Cedeño Blume, Ana Margoth Chamorro Benavidez, Víctor Adolfo Hernández Díaz y Guillermo Poveda Perdomo; y, por ende, serán separados del conocimiento del presente proceso.

**2.** El proceso quedará a cargo de este Despacho, para adoptar la decisión de fondo que corresponda. **OFÍCIASE** por Secretaría de esta Corporación a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos -Sección Reparto-, para que realicen la correspondiente compensación.

**3. RECONFORMASE** la Sala Jurisdiccional de Decisión con los Magistrados Oscar Valero Nisimblat, Luz Elena Sierra Valencia y el suscrito, única y exclusivamente para decidir este asunto.

**4. COMUNICASE** esta decisión a los Magistrados Patricia Feuillet Palomares, Jhon Erick Chaves Bravo, Eduardo Antonio Lubo Barros, Oscar Silvio Narváez Daza, Omar Edgar Borja Soto, Ronald Otto Cedeño Blume, Ana Margoth Chamorro Benavidez Víctor Adolfo Hernández Díaz y Guillermo Poveda Perdomo.

**COMUNIQUESE y CÚMPLASE**

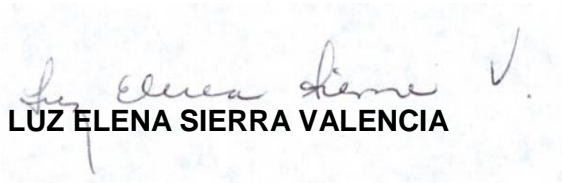
**Impedimento. Expediente Radicación No. 76001-33-33-017-2018-00263-02**

Providencia discutida y aprobada en sesión de hoy. Acta No. **081**

Los Magistrados,



**FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ**



**LUZ ELENA SIERRA VALENCIA**



**OSCAR VALERO NISIMBLAT**